

Globethics Repository

The logo for Globethics, featuring the word "Globethics" in white, sans-serif font centered within a solid blue rectangular background.

Brasil [Brazil]

This page was generated automatically upon download from the Globethics Repository. More information on Globethics see <https://www.globethics.net>. Data and content policy of Globethics Repository see <https://repository.globethics.net/pages/policy>.

Item Type	Article
Authors	Engel, Esteban
Publisher	Fundación Friedrich Ebert (FES)
Rights	Creative Commons Copyright (CC 2.5)
Download date	2026-07-03 01:48:32
Link to Item	http://hdl.handle.net/20.500.12424/220066

Brasil. Las demandas acumuladas

Engel, Esteban

Esteban Engel: Periodista argentino, corresponsal en Brasil de la agencia de noticias DPA.

La similitud de los pronósticos refleja, más allá de diferencias ideológicas, posición social y simpatías políticas, el convencimiento de que el candidato ganador de las próximas elecciones presidenciales de octubre deberá recoger en unos meses los frutos de uno de los lustros más convulsionados de la reciente historia brasileña. Independientemente de quién salga favorecido por el voto de casi cien millones de electores, el futuro presidente del Brasil será depositario de las demandas acumuladas al cabo de casi cuatro décadas de «milagro económico».

Si en 1989 la elección de Fernando Collor de Mello - la primera realizada en forma directa en la historia del Brasil contribuyó a satisfacer las exigencias de la sociedad para afirmar la democracia instaurada después de la dictadura militar, la elección de 1994 tiene la cuestión social como hilo conductor.

Pese a serias deficiencias institucionales, nadie puede poner en duda hoy seriamente las conquistas democráticas alcanzadas desde 1985. Los «destapes» de innumerables escándalos de corrupción la casi irrestricta libertad de prensa, la aparición y permanencia en el escenario político de nuevos partidos y organizaciones no gubernamentales y el ascenso de figuras con un fuerte discurso moralizador como la del sociólogo Herbert de Souza con su campaña contra el hambre, confirman la estabilidad de la democracia en el mayor país del continente latinoamericano. Las veleidades «fujimoristas» de sectores de la clase política y las fuerzas armadas enfrentan hoy la sólida resistencia de una mayoría que rechaza una salida autoritaria a la crisis.

A este panorama optimista se suma una situación macroeconómica considerada - pese a las incertidumbres derivadas de una inflación del 3.000% anual y un descomunal déficit público básicamente positiva por los actores del sector productivo, aunque para un observador desprevenido el ritmo de la devaluación de por sí ya podría suscitar, por lo menos, pavor. Un superávit comercial de 13.000 millones de dólares, un crecimiento del producto bruto de 5% y un colchón de 35.000 millones de dólares en reservas de divisas son los datos puntuales que estadísticamente colocan al Brasil en la lista de las diez principales potencias industriales del mundo.

La industria automotriz, locomotora de la economía brasileña, vivió con 1.390.000 unidades vendidas en 1993, el mejor año de toda su historia. El boom beneficia sobre todo al triángulo industrial formado por San Pablo, Río de Janeiro y Minas Gerais, bolsones de prosperidad en un país que el economista brasileño Edmar Bacha rebautizó como «Belindia», conjugando los datos de riqueza de las zonas industriales, comparables a los de Bélgica, con los de la miseria, idénticos a los del subcontinente indio. Este defasaje encuentra su expresión en la inequidad de la distribución de la renta nacional, personificada en 32 millones de hambrientos y siete millones de niños callejeros. La transferencia de los ingresos de «abajo hacia arriba» y el persistente vaciamiento del Estado iniciado con los militares y continuando con Collor de Mello, llevaron a una virtual destrucción de los servicios públicos, el colapso de los sistemas de seguridad social, el desquicio de la educación y la salud. A ello se suman la inseguridad jurídica, cuya mueca brutal son los escuadrones de la muerte que actúan al amparo de la impunidad.

De Collor a Franco

La renuncia de Collor de Melo a fines de 1992, tras la inédita movilización social que exigía su enjuiciamiento por corrupción, cerraba la etapa de consolidación democrática. Pero aunque Itamar Franco, sucesor del «marajá de Alagoas», intentó imprimir con su carácter taciturno el sello de la era post-Collor y finalizar sin excesivos sobresaltos el lustro constitucional, no consiguió frenar el ritmo de las transformaciones iniciadas a comienzos de la década.

Los escándalos de corrupción al más alto nivel, que se creían expurgados con la salida del clan Collor, conmovieron desde mediados de 1993 al Parlamento, generando una nueva ola de demandas de moralización de las instituciones. Decenas de diputados y políticos regionales fueron acusados y algunos de ellos condenados. Los «enanos del presupuesto», la logia de una veintena de legisladores que durante años se dedicó a saquear las arcas públicas manipulando las transferencias del gobierno a los estados federados, pusieron al desnudo serias brechas en el ordenamiento jurídico de la federación: a una rígida centralización administrativa, concentrada en unas pocas manzanas de Brasilia, se contraponen el dominio de los caciques en las provincias y sus inescrupulosos agentes parlamentarios.

La discusión sobre la reforma de la constitución de 1988, que el Parlamento debía realizar en el transcurso de 1994, se convirtió en la piedra de toque en la disputa entre los sectores «estatizantes» y los autoproclamados «modernizadores». La controversia reveló en forma plástica la pérdida del consenso que la izquierda y la de-

recha habían mantenido en las últimas décadas en torno al desarrollo brasileño. La convicción compartida de que la industrialización debía realizarse a puertas cerradas y de espaldas al mercado mundial dio paso a un quiebre en los diseños políticos, generando un debate similar al que otros países latinoamericanos vivieron con la puesta en marcha de los planes de ajuste a principios de la década de los 80.

Aunque la apertura de la economía había sido iniciada de facto en la era Collor con la eliminación de la «reserva de mercado» para equipos de informática y una acelerada reducción de las barreras arancelarias, los debates sobre el marco del desarrollo económico arreciaron con la revisión constitucional. La Confederación Nacional de Industrias (CNI), apoyada en los partidos de derecha, se convirtió en la punta de lanza de los revisionistas, para quienes la eliminación de los artículos constitucionales sobre derechos laborales, las restricciones a la inversión extranjera y la defensa de empresas estatales constituyen la llave maestra para el crecimiento económico.

Las presiones, articuladas a través de un poderoso y aceitado lobby en Brasilia, recibieron ayuda del exterior de ejecutivos y analistas que aventaban el fantasma de la desinversión en caso de un fracaso de la reforma, exigiendo una mayor apertura al capital extranjero, la privatización de las empresas estatales y la «flexibilización» de las relaciones laborales. Pero el esfuerzo reformista naufragó en medio de un poder legislativo paralizado por el «mar de barro» de los escándalos y la cerrada oposición de la izquierda parlamentaria, encabezada por el Partido de los Trabajadores (PT).

El PT: de la marginación a la oposición

Fue precisamente el PT que, a una década de su fundación y con 36 diputados y un senador en el Parlamento, logró aglutinar las aspiraciones de la oposición en aquellos casos en que la débil coalición de gobierno, formada por el centrista Partido del Movimiento Democrático Brasileño (PMDB) y el Partido Socialdemócrata (PSDB) de Cardoso no lograba retirar las piedras que ella misma se colocaba en el camino. Creado al amparo de los sindicatos metalúrgicos de San Pablo y apoyado por comunidades de base de la iglesia católica, el PT había dado su salto al escenario nacional con la conquista de la alcaldía de San Pablo y con el 44% de los votos de Lula en la segunda vuelta de las elecciones en 1989.

De esta forma, logró romper la marginación a la que lo habían condenado los medios de comunicación para transformarse en una de las principales referencias po-

líticas de Brasil y América Latina. A ello contribuyó su capacidad para articular demandas que trascendían el marco de la clase obrera de los grandes centros industriales y parte de los funcionarios públicos, y canalizar reivindicaciones «parciales», por ejemplo de los movimientos de trabajadores rurales sin tierra, los afectados por las sequías del Nordeste y las víctimas de las violaciones a los derechos humanos.

En una experiencia nueva en la lucha proselitista brasileña, Lula inició a mediados de 1993 las «caravanas de la ciudadanía» en el interior del Brasil, recorriendo a lo largo de 33.000 kilómetros pequeños poblados y zonas que hasta entonces sólo habían recibido las visitas de caciques regionales. Las caravanas, que prácticamente transitaban todos los estados entre el Amazonas y Río Grande do Sul, lograron romper el aislamiento impuesto al PT por las cadenas de televisión, convirtiéndose por sí mismas en noticia de primera plana. Para miles de personas, Lula fue el primer político de envergadura nacional al que lograban ver en carne y hueso; y este proyecto de comunicación alternativa se transformó en receptáculo de las preocupaciones de la población.

El PT había logrado, además atraer a sus filas a una porción de la sociedad civil ávida por articularse políticamente. Aunque el ingreso de remanentes de la izquierda comunista y no comunista sometieron al partido a una por momentos agria lucha de tendencias, el PT confirma, en vísperas de las elecciones de 1994, que es hoy el único agrupamiento político cuyo eje de acción es primordialmente programático y no personalista.

Fueron precisamente sus posiciones en temas polémicos como el rechazo a la reforma constitucional, las críticas al plan económico, la negativa a consentir la privatización de las telecomunicaciones y el petróleo, y reivindicaciones como la legislación del aborto o el casamiento entre homosexuales que le valieron las críticas más fuertes de la derecha. Dividido en cinco tendencias, desde la «Democracia Radical» de socialdemócratas al estilo europeo, pasando por corrientes trotskistas a grupos independientes ligados a la Iglesia, ofrece un blanco fácil en una lucha política fuertemente personalizada.

Las diferencias insoslayables en el interior del PT quedaron patentes con la frustrada revisión constitucional. En un enfrentamiento similar al que vivieron los verdes alemanes en la década pasada entre «realistas» y «fundamentalistas», una mayoría de la bancada parlamentaria del PT se inclinaba por participar en la eventual reforma. La dirección nacional del partido, en cambio, dominada por la «Opción de Iz-

quierda» agrupada en torno al secretario general Rui Façao, exigía a los diputados abstenerse de participar y boicotear el pleno del Parlamento y las comisiones revisoras. En el noveno Encuentro Nacional del PT, a principios de mayo último, Lula, en un hábil juego de muñeca asumió el papel de árbitro, limando las aristas más controvertidas del programa electoral (legalización del aborto, moratoria inmediata de la deuda externa) propuestas por el ala de los «chiitas», como la prensa dio en llamar a los sectores más radicalizados.

Del Plan FHC al Plan Real

Sin embargo, las controversias sobre la Constitución sólo lograron captar parcialmente el interés público. Sobre el telón de fondo de una inflación galopante, la necesidad de «poner orden» en casa constituye - desde ángulos diversos - el primer punto en la agenda de todos los candidatos presidenciales.

El tránsito de Fernando Henrique Cardoso de canciller a cuarto ministro de Hacienda del gobierno de Franco a mediados de 1993, despertó esperanzas, sobre todo en los sectores urbanos, de un cambio de rumbo. Avalado por su prestigio académico, «FHC» asumió el ministerio de Hacienda reafirmando el apoyo que su partido, el PSDB, daba a la gestión de Franco, quien con el paso de los meses veía desangrarse su gabinete y el apoyo parlamentario. El PSDB, una escisión del Movimiento Democrático Brasileño que en los años 70 aglutinó a la oposición contra los militares, había logrado capitalizar el apoyo de sectores medios e importantes figuras del mundo intelectual y artístico. Sin embargo, la ausencia de una sólida estructura organizativa y su falta de inserción en el medio obrero constituyen hoy su principal obstáculo y amenazan con transformarse en causa de una derrota en las urnas, como veremos más adelante.

Cardoso, apoyado en los técnicos que un lustro antes habían ideado el Plan Cruzado, comenzó a poner en práctica en el último trimestre de 1993 una serie de medidas, que, según el gobierno, estaban destinadas a atacar de raíz el mal de la inflación. El ataque frontal a la inflación se convirtió en el eje del discurso oficial, y FHC en el «mago de Oz» en el que Franco, un aficionado confeso en temas económicos, depositó toda su confianza. Las decisiones no tardaron en llegar. En octubre, tras una extenuante negociación parlamentaria que contribuyó a afirmar su prestigio como hábil negociador, Cardoso anunció la creación de un Fondo Social de Emergencia, destinado a reducir las transferencias del gobierno central a los estados federados, en lo que constituía una acusación tácita a las provincias de que son en realidad ellas el «agujero negro» por el que se desangran las finanzas públicas.

Con una vigencia de dos años y el aval del Parlamento, el Fondo intentaba romper el estrecho corsé que la Constitución impone al manejo de las finanzas por parte del Estado central, obligándolo a transferir el 80% de la recaudación impositiva a los estados federados. El segundo paso fue la creación de la Unidad Real de Valor (URV), un nuevo índice ligado al dólar y destinado a uniformar la evolución de precios y salarios bajo un mismo parámetro. Aunque en un primer momento quedó librada a los actores económicos la adopción de la URV, los salarios pasaron a ser indexados diariamente, reduciendo parcialmente las pérdidas inflacionarias en el momento del pago a fin de mes.

Ideada como base de una nueva moneda, el real, la URV entró en vigencia el 1° de mayo como versión brasileña de experiencias de Europa del Este en materia de lucha antiinflacionaria. Un «currency board», adscripto al Banco Central y al Ministerio de Hacienda, determina diariamente el valor de la URV en base a la evolución de los precios, la cotización del dólar y la disponibilidad de divisas. Aunque éxitos iniciales revelaban un cierto freno en la evolución de los precios, la inflación permaneció atascada en índices de entre el 42 y 50% mensual. Cardoso anunció entonces la pronta puesta en circulación del real, aunque sin dar una fecha precisa, y acompañado de los buenos consejos de su colega argentino, Domingo Cavallo, padre del Plan de Convertibilidad del país vecino, uno de los modelos del plan brasileño.

A fines de marzo, amparado por las expectativas positivas de su plan, impulsado por las encuestas que lo daban como presidenciable y apremiado por el plazo legal para oficializar su candidatura, Cardoso anunció su renuncia al Ministerio para lanzarse a la carrera hacia el Palacio de Planalto. Las expectativas que despertó la candidatura entre simpatizantes del ex-ministro y el PSDB dieron paso a la desilusión cuando Cardoso anunció la decisión de aliarse con el Partido del Frente Liberal (PFL). Principal heredero del ARENA, el partido creado por los militares durante la dictadura. El PFL cuenta - a diferencia del PSDB - con una sólida máquina partidaria, tres millones de afiliados y el dominio sobre nueve gobiernos estaduais. La elección de un caudillo del Nordeste y padrino político de Collor de Mello como compañero de fórmula no contribuyó precisamente a silenciar las críticas.

Otro de los móviles de la alianza entre quien estuviera exiliado en el Chile de Salvador Allende y los herederos de la dictadura es la reglamentación que distribuye el tiempo de propaganda política en televisión según el número de bancadas parlamentarias. La alianza coloca a la coalición electoral de Cardoso en una posición de privilegio frente al PT de Lula. La decisión del gobierno de lanzar el real el 1° de ju-

lio, cuatro meses antes de las elecciones, expuso a Cardoso a críticas de que el plan económico, que ideara en el gobierno y cuya puesta en práctica pusiera en manos de su sucesor, Rubens Ricupero, tenía carácter electoral y cosmético. Los reparos son particularmente sensibles, ya que Cardoso ligó su éxito electoral al del Plan Real.

La lucha por la candidatura «anti-Lula» también se desató en el interior del PMDB, el mayor agrupamiento político del Brasil, con 4,5 millones de afiliados y un aparato apoyado en más de 1.600 alcaldías y seis gobiernos estaduais. Debilitado por los escándalos de corrupción que involucraron a varias de sus principales figuras, el PMDB lanzó a Orestes Quercia, controvertido ex-gobernador de São Paulo, a la lucha por la presidencia, desestimando las apetencias del ex-presidente José Sarney. También el controvertido ex-gobernador de Río de Janeiro, Leonel Brizola, quien en 1989 perdió por escaso margen el segundo puesto ante Lula, consiguió sin dificultades la candidatura por el Partido Democrático de los Trabajadores (PDT), pero enfrenta altos niveles de rechazo tanto en su propio estado como en el sur del país.

Conclusión

Más allá de las tareas que deberá enfrentar el nuevo gobierno, la pregunta crucial es hoy con quién podrá hacerlo. Si Itamar Franco administró el país durante dos años casi exclusivamente con medidas provisionarias, aguadas luego por el Parlamento, un futuro gobierno deberá apoyarse en los cuatro años de gestión en una mayoría parlamentaria. Sin embargo, la atomización partidista y el caudillismo regional lo obligarán a buscar alianzas en forma permanente, amenazando con repetir el estado de zozobra política vivido durante el bienio de Franco.

Esta circunstancia es particularmente delicada para Lula, ya que el PT cuenta hoy con sólo 36 de las 503 bancadas del Parlamento. El fuerte contenido regionalista del voto brasileño y la ausencia de fuertes personalidades políticas locales en las listas del PT ponen en cuestión un aumento significativo de este número. De esta forma podría volver a repetirse el «impasse» actual, en el que la izquierda no logra imponerse sobre la derecha, liderada por el PFL y los sectores más conservadores del PMDB.

Un gobierno de orientación conservadora podrá, en un primer momento, excluir de sus planes a los nuevos actores sociales. Una parte importante de la sociedad ci-

vil continuaría marginada del proceso político, y debería esperar su oportunidad para dentro de cuatro años.

Río de Janeiro, junio de 1994 .